



Dirección General de Infancia,  
Familia y Fomento de la Natalidad

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y  
POLÍTICA SOCIAL



UNIÓN EUROPEA  
Fondo Social Europeo  
El FSE invierte en tu futuro

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA JOVENES DE 18 A 21 AÑOS EN GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PROCEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID COFINANCIADO AL 40% POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2021-2027)

La Comunidad de Madrid, en virtud del artículo 26.1.24 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, tiene atribuida competencia exclusiva en materia de protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud. En particular, corresponde a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (en adelante, DGIFFN), de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, entre otras funciones, el impulso de políticas de protección al menor y a la familia, así como la promoción de recursos y actuaciones dirigidos a la consecución del bienestar social de la infancia y la adolescencia y el impulso de la investigación para un mejor conocimiento de la situación y problemas de la infancia, la adolescencia y la familia en la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 208/2021, de 1 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

La experiencia de la Comunidad de Madrid con los jóvenes protegidos pone de manifiesto que, al alcanzar la mayoría de edad y cesar, en consecuencia, la acción jurídica protectora, han de hacer un tránsito a la vida adulta, acelerado y comprimido, agravado por las circunstancias familiares y sociales que dieron lugar a la medida de protección. El tránsito a la vida adulta se convierte así en un proceso de alto riesgo, y el joven resulta sin duda especialmente “vulnerable”, por doble partida, por escasez de recursos personales, y por la inexistencia, o presencia limitada de un entorno social y familiar que ofrezca los apoyos necesarios, agravado, en muchos casos, por la dificultad añadida de contar con un techo bajo el que cobijarse tras su salida del centro de acogimiento residencial.

Cada año, en torno a 200 chicos y chicas salen de los centros de protección de la Comunidad de Madrid al cumplir los 18 años. Sin embargo, muchos deben hacerlo sin los soportes sociales y familiares, cuya carencia aconsejó en su momento la adopción de medidas de protección y su mantenimiento hasta la mayoría de edad. Estos jóvenes continúan necesitando un apoyo básico que les permita completar su desarrollo personal y su tránsito a la vida autónoma, que culmine el esfuerzo desarrollado en el seno del sistema de protección.

De hecho, cada día existe mayor interés y atención de los poderes públicos a este respecto, tanto a escala europea, como estatal y autonómica. Buena prueba de ello son los **Programas Operativos del Fondo Social Europeo de la Estrategia Europea 2020**, los objetivos operativos definidos en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 así como la reciente y ambiciosa modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia operada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, que actualizan diferentes cuerpos legislativos, para adecuarlo a los cambios sociales producidos en los últimos años así como a la normativa internacional reciente. En particular, la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor contempla ahora en su artículo 22 bis que **las Entidades Públicas habrán de ofrecer programas de preparación para la vida independiente para jóvenes bajo medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad**, desde dos años antes de su mayoría de edad, y una vez cumplida ésta, siempre que lo necesiten, para seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas. En la misma dirección ha ido la normativa y planes estratégicos de los que han ido dotándose la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas.

Para dar respuesta a esta necesidad social y cumplimiento al mandato normativo, la Comunidad de Madrid implementó el Plan de Autonomía Personal 16-21, destinado a procurar itinerarios que permitan compensar los déficits y mitigar los riesgos de la emancipación precoz y acelerada de estos jóvenes. Este Plan cuenta con dos programas, el Programa de Autonomía Personal 16-18 y el **Programa de Tránsito a la Vida adulta 18-21**. Éste último contempla ampliar el



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **0981295296597493953610**

acompañamiento y seguimiento de los jóvenes del sistema de protección, hasta al menos los 21 años, para que cuenten con los recursos sociales necesarios que prevengan el riesgo de exclusión social.

En cuanto al **Programa de Inserción Socio-Laboral**, es obvio que para hacer posible este tránsito a la vida adulta en condiciones que les permitan continuar con su proceso de maduración e integración social, estos jóvenes han de tener la oportunidad de completar un itinerario básico que les dote de las dos herramientas fundamentales para un adecuado ajuste psicosocial:

## **FORMACIÓN Y EMPLEO**

La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid, por su parte, en su artículo 3, sobre los principios de actuación a los que debe responder la actuación de la administración, enuncia entre otros, el de promover la participación de la iniciativa social en relación con la atención y promoción de la infancia y la adolescencia, procurando su incorporación a los planes y programas de atención impulsados por las Administraciones Públicas y en la misma línea, el artículo 90 promueve la colaboración con entidades privadas que desarrollan actividades de interés social.

**La Comunidad de Madrid no desarrolla de forma directa un programa que atienda las específicas necesidades de inserción sociolaboral para jóvenes que han cumplido la mayoría de edad procedentes del sistema de protección y en alto riesgo de exclusión social.** Por todo ello, la DGIFFN colabora con entidades con amplia experiencia en este sector, en el impulso de programas como éste, para prestar la atención a los jóvenes que, habiendo pertenecido al sistema de protección infantil, cumplan la mayoría de edad y se encuentren en situación de dificultad y desventaja social, para procurar su tránsito a la vida adulta en condiciones satisfactorias que les permita alcanzar la plena autonomía y prevenir el riesgo de exclusión social, trabajando para que todos tuvieran igualdad de oportunidades, desarrollando su potencial y fomentando su responsabilidad social, apoyando sus procesos de formación e inserción laboral.

Desde junio de 2016 se pusieron en marcha varios convenios de colaboración para el alojamiento y acompañamiento educativo de jóvenes extutelados, entre 18 y 21 años **y un convenio de inserción sociolaboral con la Fundación ISOS**, que posteriormente volvió a firmarse el día 27 de diciembre de 2019 para continuar una línea de colaboración que redundase en beneficio de los objetivos que se pretenden alcanzar con el Plan de Autonomía Personal 16-21: Programa de Inserción Socio-Laboral para jóvenes en riesgo de exclusión social procedentes del Sistema de Protección de la Comunidad de Madrid y que diera cumplimiento a la normativa autonómica y estatal en esta materia.

Este convenio se pretende sustituir por un contrato, dado que este servicio debe ser liderado por la Administración Pública como propio sin tener que recurrir a fomentar únicamente las iniciativas de las entidades del Tercer Sector y porque las prestaciones, tal y como se han ido ampliando a lo largo del tiempo han devenido en contenido contractual, por lo que debe promoverse la concurrencia entre las entidades que trabajan en este ámbito, ya que esta competitividad puede generar conocimiento y mejoras en la forma de abordar una atención educativa y de inserción socio-laboral a jóvenes mayores de edad y que se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social, por carecer de apoyos familiares o por no contar con un nivel de autonomía personal ni económica suficiente para vivir de forma independiente, jóvenes que hasta su mayoría de edad han estado protegidos a través de diferentes medidas por la Comunidad de Madrid.

Una característica fundamental del Programa de Inserción Socio-Laboral para jóvenes en riesgo de exclusión social procedentes del Sistema de Protección de la Comunidad de Madrid es el **carácter individualizado de la intervención para adaptarla a las necesidades especiales de los jóvenes extutelados.**



El trabajo en red y los procedimientos de coordinación y colaboración con todos los agentes implicados son también importantes, por lo que esta licitación es una oportunidad para movilizar las mejores prácticas para favorecer la transición a un proyecto de vida autónoma y prevenir el riesgo de exclusión social.

Asimismo, el Programa desarrolla acciones y metodología específicas para jóvenes con diversidad funcional u otras situaciones de discriminación, que vulneren sus derechos, para incluirlos como participantes del programa, evaluando sus situaciones para adaptar las respuestas a sus necesidades de integración socio-laboral.

Respecto al número de participantes desde el inicio de esta colaboración (junio 2016), se ha situado en 1.268 participantes, finalizando su paso por el programa con experiencias positivas en la inserción laboral. La media de atención anual se sitúa en 317 participantes.

Si atendemos a la procedencia de los participantes por nacionalidad, nos encontramos que, del total de las altas que se han dado, **el 40 % (507 participantes) son de nacionalidad española**, y un 60 % **(761 participantes), son de procedencia extranjera**.

Este programa se desarrolla a través de las siguientes áreas de intervención:

**a. Información y orientación a los jóvenes.**

- Evaluación socio-laboral de los usuarios;
- Diseño personalizado de itinerarios de inserción socio laboral;
- Derivación a los recursos y seguimiento de los usuarios;
- Incorporación a procesos formativos adaptados a las características de los participantes;
- Desarrollo de grupos de búsqueda de empleo;
- Talleres de mejora y consolidación de competencias clave para el empleo;
- Entrenamiento en la búsqueda activa de empleo y manejo de nuevas tecnologías, aplicadas a esta finalidad;
- Mediación entre empresa y jóvenes ante posibles conflictos;
- Información de derechos y deberes del trabajador.
- Con cada participante se seguirá un proceso tutorizado, ofreciéndoles una atención personalizada un acompañamiento durante todas las fases de proceso.

**b. Las actuaciones dirigidas a las empresas serán las siguientes:**

- Captación de ofertas de trabajo;
- Contactos directos con empresas y creación de cartera de clientes del ámbito empresarial;
- Búsqueda de empresas que ofrezcan proporcionar experiencias vocacionales a los adolescentes y jóvenes usuarios del proyecto.

**c. Apoyo y cobertura de necesidades básicas**

- Proporcionar ayuda económica para alojamiento, transporte y manutención, a fin de cubrir las necesidades básicas, con objeto de dar respuesta a las situaciones de urgencia sobrevenidas, estableciendo un seguimiento de su evolución.

Respecto a los **datos de inserción laboral** que se han generado desde el inicio del Programa (junio 2016), **se han conseguido 1.925 ofertas de trabajo, en total, han dado como resultado 1.152 contratos**. Es de destacar el elevado porcentaje de ofertas de empleo que dan lugar a contratos (63%) y que se atribuye al servicio de asesoramiento y mediación que el programa ofrece a las empresas.



La tasa de intermediación laboral que consiguen las entidades que trabajan en este sector es más alta que la de los propios Servicios Públicos de Empleo, que se sitúan en torno a un 3 % y ello se explica por los profesionales especializados en la orientación, el asesoramiento personalizado y el acompañamiento del joven, así como por el seguimiento continuo del sector empresarial, creando estrategias para el desarrollo personal y la integración social junto con la formación, a fin de mejorar la empleabilidad de estos jóvenes, desde el conocimiento profundo de sus circunstancias intangibles, que están fuera del alcance de los servicios públicos de empleo, que no disponen de los medios suficientes para realizar un seguimiento tan exhaustivo.

Hay que señalar que se han realizado **5.752 seguimientos en empresas** en las que los jóvenes están contratados y todas estas acciones están destinadas a mejorar la adaptación de los participantes al entorno laboral y garantizar la permanencia en él.

**El hecho de que al Programa lleguen participantes con una situación documental, que les permite residir en nuestro país, pero no trabajar, ha llevado al Programa a trabajar procesos de sensibilización social con el entramado empresarial con el propósito de conseguir como objetivo final, que las empresas puedan apoyar procesos de regularización,** permitiendo plantear la modificación de un permiso de residencia no lucrativa a residencia y trabajo mediante una oferta de empleo y así reforzar el itinerario encaminado a la autonomía, mediante su inserción laboral.

En este sentido, es relevante destacar la reciente publicación del Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE (20 de octubre de 2021). En su exposición de motivos se hace eco de la grave dificultad señalada anteriormente, así *“...la residencia de los y las menores que sean tutelados en España por una Administración Pública o, en virtud de resolución judicial, por cualquier entidad, se considerará regular. Pese a ello, la falta de documentación de estos/as menores plantea, en la práctica, importantes dificultades no solo mientras mantienen esta condición sino, especialmente, en el momento en el que cumplen los dieciocho años y acceden a la mayoría de edad. Estas dificultades inciden de forma negativa en su inclusión e integración en la sociedad, especialmente en el caso de las menores no acompañadas por su mayor vulnerabilidad”*

Con esta reforma se propone acabar con la aplicación del régimen de residencia no lucrativa, que obligaba a estos jóvenes a acreditar medios económicos propios en una cantidad que representara mensualmente el 100% del IPREM y que no podía ser complementado o sustituido por el apoyo recibido por parte de entidades o ayudas públicas, una exigencia muy difícil de cumplir para adolescentes extranjeros que solían buscar su primera oportunidad laboral.

Estas reglas no se ajustaban a las particularidades del colectivo, así como a los programas educativos o de inclusión sociolaboral que instituciones públicas y privadas dirigían a estos jóvenes, con el fin de acompañarlos hacia su transición a la mayoría de edad y a una vida independiente. Por tanto, esta reforma se plantea en torno a nueve elementos que tienen por finalidad suprimir los obstáculos que impiden la documentación del menor extranjero no acompañado tutelado por una entidad pública y diseñar un régimen propio de residencia para éstos en el momento en el que acceden a la mayoría de edad, distinto al régimen de residencia no lucrativa, que se prevé para otros fines alejados de la situación de estos jóvenes. En este nuevo régimen, **se tendrá en cuenta su participación en programas desarrollados por instituciones públicas o privadas y que promueva un correcto desarrollo personal y su mejor inclusión en la sociedad.**

De esta manera, desde el Programa de Inserción Socio-laboral para jóvenes de 18 a 21 años se realiza una acción continua de información, orientación, acompañamiento y asesoramiento en dicho ámbito.



La evaluación de los datos del Programa de Inserción Socio-laboral para jóvenes de 18 a 21 años en grave riesgo de exclusión social procedentes del Sistema de Protección de la Comunidad de Madrid, refleja la necesidad de seguir contando con un programa específico de estas características, de carácter transversal, trabajo en red y procedimientos basados en la coordinación entre los protagonistas del proceso de inserción, esto es, los jóvenes extutelados, los profesionales de los pisos donde residen, los empresarios que les ofertan empleo y los profesionales del Programa, así como todos aquellos servicios, programas e instituciones involucrados en los itinerarios.

En el contexto actual, en el que confluyen una tasa de paro juvenil del 40% con la crisis económica y del mercado laboral originada por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid19, el acceso de los jóvenes extutelados al mercado laboral **sin el apoyo por parte de las administraciones resulta prácticamente inviable**, lo cual genera en ellos un grave riesgo de exclusión social.

Es preciso remarcar también, por otro lado, que la situación actual derivada de la pandemia de la Covid19 ha acarreado una pérdida de empleo importante de estos jóvenes que son más vulnerables, procesos de ERTE, dificultades para encontrar empleo en el mercado laboral e identificación de situaciones de especial necesidad por falta de ingresos para afrontar alquiler de vivienda o alimentación.

Esta situación genera una situación de incertidumbre, en primer lugar por no saber cómo se va comportar el mercado laboral dentro de la “*nueva normalidad*” y en segundo término, se plantea un escenario que complica la capacidad de los jóvenes para insertarse laboralmente, ya que la demanda actual del mercado, requiere tener unas cualidades y capacidades profesionales, que muchos de los participantes del programa no tienen, por su falta de formación previa, experiencia profesional y recorrido en el mercado de trabajo.

Como se ha comentado anteriormente, un porcentaje alto de los jóvenes en riesgo de exclusión social son de procedencia extranjera, por lo que **una mayor inserción e integración socio-laboral de estos jóvenes es una inversión a largo plazo y un retorno social para la Administración, que va a incorporar al sistema a más jóvenes que coticen para consolidar la solidaridad intergeneracional y va a evitar problemas de delincuencia, desamparo y situación de calle.**

Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, se propone la tramitación de un contrato para el desarrollo del programa de inserción socio-laboral para jóvenes de 18 a 21 años en grave riesgo de exclusión social procedentes del sistema de protección de la Comunidad de Madrid.

Este programa va a ser cofinanciado por Fondo Social Europeo, dentro del programa operativo FSE+ de la Comunidad de Madrid (2021-2027), porcentaje de cofinanciación 40% encuadrado en la Prioridad de Empleo Juvenil y en el objetivo específico I) según recoge el art 4.1 del Reglamento (UE) 2021/1057 de 24 de junio, por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

I) Promover la integración social de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, incluidas las personas más desfavorecidas y la pobreza infantil.

La elección de este objetivo específico se justifica en que la actuación se dirige a lograr la mayor empleabilidad de los jóvenes extutelados para conseguir su integración sociolaboral y la creación de una red dinámica y activa que permita compensar las desventajas ante las que se enfrenta este colectivo en su proceso de transición a la vida adulta. Tras su reforma en 2015, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, recoge la obligación de las administraciones públicas de impulsar políticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales en niños y adolescentes y de preparar para la vida independiente a los jóvenes que habiendo estado sujetos a medidas de protección alcancen la mayoría de edad (artículos 11 y 22 bis).





El presente contrato cumple, por tanto, los criterios de selección ligados a los objetivos generales asociados a este Objetivo que van dirigidos a:

- Promover la inclusión social.
- Luchar contra la pobreza y la discriminación.
- Promover la igualdad de oportunidades de acceso al empleo, así como la participación activa y la mejora de la posibilidad de encontrar empleo, mediante la promoción de, condiciones de trabajo justas, fomento del emprendimiento y mejora de la empleabilidad.

Asimismo, se cumplen los criterios de carácter transversal que se incorporan a este Objetivo Temático a través de los que se persiguen unos objetivos generales que conllevan la obligatoriedad de su cumplimiento, ya que en su mayoría forman parte de los principios de actuación que guían el conjunto de la actividad realizada.

En Madrid, a la fecha de la firma

**EL DIRECTOR GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA  
Y FOMENTO DE LA NATALIDAD**

Fdo.- Alberto San Juan Llorente

